



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL
Radicado: 05266-31-05-002-2023-00282-01 (E2-23-373)
Accionante: AFP PROTECCIÓN S.A.
Accionado: CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO
Asunto: MANDAMIENTO DE PAGO – REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO

En Medellín, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 005266-31-05-002-2023-00282-01 (E2-23-373), instaurado por la sociedad AFP PROTECCIÓN S.A. en contra de la sociedad CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S. con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por la AFP PROTECCIÓN S.A., contra el auto del 05 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, con el que resolvió negar el mandamiento de pago.

1. ANTECEDENTES

La sociedad AFP PROTECCIÓN S.A., actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de la sociedad CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S. en procura de obtener el pago de la suma de \$ 18.930.618 por concepto de aportes al SGSSP, junto con el valor de los intereses de mora que se causen hasta que se verifique el pago total de la obligación y las costas.

Como fundamento de sus pedimentos, informó que los trabajadores de la sociedad CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S. que se encuentran relacionados en el estado de cuenta, se encuentran afiliados al RAIS administrado por esta sociedad, siendo la ejecutada, la directamente responsable por el pago de los aportes al SGSSP a nombre de sus empleados. Aseguró que el empleador CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S. adeuda un total de \$ 27.067.118 por concepto de contribuciones e intereses adeudados al SGSSP, a la par de que, no contestó el requerimiento previo para la solución definitiva de la deuda

1.1. Trámite de primera instancia

El cobro coactivo referido correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado el 25-jul-2023 (doc.01, carp.01), anexando *“detalle de deudas por no pago – fondo de pensiones obligatorias”*, liquidación de las cotizaciones al SGSSP adeudadas y los intereses de mora, copia cotejada del requerimiento y los anexos remitidos al representante legal del empleador ejecutado, así como el certificado de existencia y representación legal del fondo de pensiones y del empresario demandado (págs.16 a 140, doc.02, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La juzgadora de instancia en auto del 05-oct-2023 (doc.03, carp.01), dispuso *“NEGAR el mandamiento de pago deprecado por la AFP PROTECCIÓN S.A. en contra de CESAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S.”*, y de consiguiente, dispuso el archivo de las diligencias. A ese respecto, la cognoscente de primer grado luego de relacionar las disposiciones legales que reglamentan las obligaciones del empleador frente a las contribuciones en materia de seguridad social, asentó que *“...el título ejecutivo para el cobro de aportes obligatorios de pensiones, estará constituido, por la liquidación de lo adeudado por parte del empleador moroso, la que deberá ser elaborada por el respectivo Fondo de Pensiones y ésta deberá contener los mismos montos y períodos que el Fondo remita al empleador al momento de requerirlo; y por la prueba de la realización del requerimiento al empleador moroso, en debida forma”*.

Tras esa consideración, con apoyo en el contenido de las resoluciones nros. 444 del 28-jun-2013, 2082 de 2016 y 1702 del 28-dic-2021, razonó que es menester que las administradoras de fondos de pensiones den *“...aviso de incumplimiento encaminado a incentivar el pago voluntario de las contribuciones parafiscales adeudadas, el cual consiste en que una vez se realice la liquidación de los aportes en mora y los correspondiente intereses moratorios, en un plazo que no podrá ser superior a quince (15) días, deberá remitir un primer requerimiento al empleador moroso, informándole el estado de mora y la liquidación realizada, sino hay respuesta, o la misma no acredita el pago o liquidación parcial, deberá remitirse un segundo requerimiento con la liquidación de los aportes en mora e intereses moratorios, en un términos entre los treinta (30) días siguientes al primer contacto, sin superar los cuarenta y cinco (45) días”*; procedimiento que no encontró cumplido. Del mismo modo, la a quo precisó que no se tiene constancia de envió y de recibido efectivo por parte del empleador, en la medida en que *“la guía de entrega posee sello de recibido del edificio donde se ubica la sociedad, más no se tiene plena constancia de que la comunicación con el requerimiento haya sido efectivamente*

recibida”, mientras que “en el apartado de destinatario únicamente se relaciona «representante legal», más en ningún lugar se avizora un direccionamiento efectivo a la sociedad ejecutada”.

Así mismo, estimó como un defecto de la demanda ejecutiva, el hecho de que la sociedad administradora haya tardado más de 15 días entre la entrega del requerimiento al empleador moroso y la elaboración de la liquidación de aportes impagos, evidenciándose una diferencia entre la información consignada en la comunicación remitida al empleador y la liquidación que fuera traída como título ejecutivo. Ulteriormente, aseguró que la AFP accionante incluyó intereses de mora sobre los aportes causados para ciclos de diciembre de 2021 y febrero, marzo, mayo y junio de 2022, desconociendo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, modificado por el artículo 26 del Decreto 538 de 2020, no se causarán intereses de mora por el no pago de aportes al SGSSP hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la emergencia sanitaria.

1.3. Recurso de Apelación

La administradora del RAIS accionada, se mostró inconforme con la decisión e interpuso recurso de alzada en orden a que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia y, en consecuencia, se disponga librar la orden de apremio en los términos solicitados.

A este propósito asevera en grandes líneas que, contrario a lo ponderado por la *a quo*, los documentos base de la ejecución satisfacen los requisitos y elementos previstos en los artículos 100 del estatuto procesal laboral y 422 del CGP, recalcando que, de acuerdo con la regulación especial de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2633 de 1994 “...se trata de un título ejecutivo complejo, integrado por el Requerimiento al empleador (estados de cuenta, prueba de entrega y comunicación al empleador haciendo le conocer el termino de 15 para pronunciarse sobre el requerimiento), liquidación del crédito posterior a los 15 días del requerimiento y título que consolida todos los detalles de la liquidación del crédito que indica el capital adeudado”; reiterando el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas pertinentes.

De otra parte, descartó la aplicación del procedimiento de cobro persuasivo contenido en la Resolución nro. 2082 de 2016, puesto que, tales disposiciones fueron derogadas con la expedición de la Resolución nro. 1702 de 2021, la que valga decir, dispuso en su artículo 10 que “[l]as acciones persuasivas, y el aviso de incumplimiento no son actuaciones que complementen el título”. Finalmente, aseguró que “...el anexo enviado al empleador requerido (requerimiento previo) puede ser esencialmente distinto a la liquidación que expedimos para constituir el título que presta mérito ejecutivo y que se aporta con la demanda, esto debido a

que la deuda puede modificarse por el paso del tiempo y que los intereses que se causan desde la fecha del requerimiento hasta la fecha de la emisión del título, deben ser cobrados por disposición legal y se encuentran debidamente soportados con los estados de deuda que se adjuntan como anexos de la demanda”.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por esta corporación el 20 de noviembre de 2023 (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual los litigantes guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S.A. advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se circunscribirá a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si la razonabilidad del ejercicio ponderativo realizado en la providencia impugnada que negó el mandamiento de pago deprecado en el *sub litium*, responde a los presupuestos formales que conforman todo título ejecutivo. Con tal objeto se analizará si los documentos adunados como título base de ejecución contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A. y en contra de la sociedad CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S.; conforme con las directrices vertidas en las disposiciones que reglamentan la materia.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión impugnada, en atención a que, no se verifican las condiciones de claridad y exigibilidad en el instrumento acopiado como báculo del compulsivo, en tanto la obligación que se pretende ejecutar con fundamento en su contenido no fue puesta en

conocimiento del empleador moroso de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.3.3.8 del Decreto 1833 de 2016, por los motivos que se expondrán a continuación.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Puestas así las cosas, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que el fin último de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción por vía coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*¹; por lo que cristalino se muestra que las actuaciones judiciales de esta índole sólo terminan por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

De lo expuesto fluye con claridad que, los títulos ejecutivos deben gozar de dos clases de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras, aluden a que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean: (i) auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, o de decisiones que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme, perspectiva desde la cual hay que considerar que el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

Entretanto, las condiciones sustanciales, apuntan a que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona, es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de dar, de hacer, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. La obligación es clara cuando no da lugar a equívocos, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación, y los factores que la determinan; es expresa, cuando de la redacción misma del documento, se avizora nítida y manifiesta la obligación; y es exigible, si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o si el plazo se hubiere extinguido, o la condición se hubiere cumplido.

De suerte que, al momento en que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, librará mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluble²; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, *no solo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda*

¹ Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

² Artículo 430 del CGP

porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado. -Subrayado intencional de la Sala-

En línea con lo anterior, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional³, en la medida en que, lo allí dispensado es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante⁴, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio⁵; siendo oportuno señalar que en este último caso el artículo 446 del CGP dispone, *[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado **cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo,** adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.* -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En ilación con lo anterior, si bien es la etapa de la liquidación del crédito, donde se concreta el valor realmente adeudado por la parte ejecutada, es insoslayable que este ejercicio aritmético, en tratándose de ejecución por sumas de dinero, debe someterse al marco y parámetros establecidos en el mandamiento de pago; de ahí que, **resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas, guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y por el otro, respondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada; lo que finalmente acaece con la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito y la posterior liquidación del crédito.**

Lo dicho para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que adelante la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, los mandatarios judiciales que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las solicitudes que estimen procedentes en orden a defender los intereses que le son

³ Artículo 424 del CGP.

⁴ Artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP. Corrección, aclaración y reforma a la demanda. Adición, corrección y aclaración de providencias. Artículo 28 del CPTSS. Reforma de la demanda. Artículo 65 del CPTSS. Procedencia del recurso de apelación.

⁵ Artículos 442 y 443 del CGP.

confiados, puesto que éstos, como conocedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.

Descendiendo al asunto que ahora concita la atención de esta Sala de Decisión, diáfano se exhibe que, el mandamiento ejecutivo se depreca con base en el título ejecutivo constituido según los lineamientos establecidos en el canon 24 de la ley que creó el Sistema General de Seguridad Social y que faculta a las entidades administradoras de los diferentes regímenes para adelantar las acciones de cobro en contra del empleador por motivo del incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 22 del mismo estatuto. Para los anotados propósitos, se dispuso que la “...liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”. Por su parte, los criterios que orientan y reglamentan la facultad de cobro de las administradoras del SGSS, se encuentran vertidos, entre otros, en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, compilado por el Decreto 1833 de 2016:

“En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.

Por su parte, al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, [c]orresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994. Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6º de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen. Parágrafo. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso.

En el panorama legal descrito, campea el requerimiento previo que debe elevarse al empleador deudor como requisito inexcusable para la conformación del título ejecutivo complejo, el que valga decir, está integrado también por la consiguiente liquidación que efectúe la administradora donde cuantifique el valor de la obligación dineraria adeudada. Memora la Sala lo anterior, para remarcar que la sociedad AFP PROTECCIÓN S.A., no cumplió con los lineamientos antes explicitados, en tanto en cuanto, verificada la documental adosada al cartulario, se tiene que, si bien es cierto, el requerimiento remitido a la sociedad CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S. fue entregado en la dirección que reposa en el certificado de existencia y representación legal como domicilio principal y donde recibe notificaciones judiciales, CL 60 B SUR 44 100 OF 917 ED LATITUD SUR de Sabaneta, Antioquia (págs.32 a 43, doc.02, carp.01), no lo es menos que la constancia de recibido corresponde al edificio Latitud Sur Torre Empresarial y no a su real destinatario, a la par de que, no existe anotación que la persona que figura firmando el recibido del comunicado y que responde al nombre de Santiago Tobón, en efecto tenga vínculo alguno con la ejecutada, pues tampoco figura en el mencionado certificado de existencia y representación legal. De ahí que, para la Sala, los elementos suasorios no muestran con claridad que la ejecutada ciertamente haya recibido el requerimiento que le fuera remitido por la administradora del RAIS, lo que naturalmente compromete la exigibilidad del título ejecutivo compuesto.

De otra parte, para enervar toda posibilidad de éxito a la apelación de la sociedad promotora del juicio, no puede evitar esta Sala cotejar la liquidación del capital e intereses traída como título ejecutivo en la suma de \$ 27.067.118 (págs.16 a 21, doc.02, carp.01), con aquella que le fuera presuntamente remitida a la convidada a juicio por valor de \$ 25.589.818 (págs.22 a 31, doc.02, carp.01); evidenciándose una confusión por motivo de las diferencias resultantes en la cuantificación de la obligación que se reputa incumplida. Ello así, mal haría el juzgador en librar la orden de pago por conceptos y valores que nunca se le pusieron de presente al empleador accionado, de cara al compendio normativo arriba trasunto.

En ese estado de cosas, a partir de las anteriores consideraciones legales y fácticas fuerza concluir que, efectivamente no le asiste razón a la censura al indicar que sí se cumplió con el procedimiento legalmente establecido para iniciar la acción ejecutiva de cobro de aportes al SGSSP, pero sí a la cognoscente de primer grado al negar el mandamiento ejecutivo, habida cuenta existe duda sobre la claridad y exigibilidad de la obligación contenida en el título ejecutivo, de donde se colige que la decisión impugnada se acompasa con las previsiones contenidas en los artículos 422 y 430 del CGP; por manera que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se impone para la Sala impartir confirmación al proveído materia de alzada, puesto que la inconformidad planteada respecto de las resoluciones emitidas por la UGPP, no se soportan en razones jurídicas válidas para modificar la decisión sometida a escrutinio.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto dictado el 05 de octubre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por la sociedad AFP PROTECCIÓN S.A. en contra el ente societario CÉSAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS n.º 213**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy 12 de diciembre de **2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en

["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario